

QUIÉN SE PREOCUPA POR EL FUTURO:

FINANCIAR SERVICIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

REPORT SUMMARY



Alianza por la
Solidaridad

Member of
act:onaid

CONTENIDO

This is a summary of the 92 page full report 'Who Cares for the Future: finance gender responsive public services!' which is available on ActionAid's website and you can access [HERE](#).

You can also find on our website the key country data we collated from IMF documents and a detailed methodological note for our research on progressive tax.

AGRADECIMIENTOS	2
1. INTRODUCCIÓN: POR QUÉ ES TRASCENDENTAL EL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO	3
2. CÓMO UNOS SERVICIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PUEDEN REDUCIR LA CARGA DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS	5
3. REPERCUSIONES DE LA NUEVA CRISIS DE DEUDA EN EL GASTO PÚBLICO	11
4. LA INFLUENCIA DEL FMI EN EL GASTO PÚBLICO	14
5. EL POTENCIAL EFECTO DE LAS REFORMAS FISCALES PROGRESIVAS	20
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
NOTAS FINALES	27

AGRADECIMIENTOS

Este informe ha sido redactado por Soren Ambrose y David Archer. La investigación original para el informe ha corrido a cargo de Abid Aslam (sobre el FMI), Tim Jones, de la Jubilee Debt Campaign (sobre la deuda), Michael Masiya y Frank Kalizinje (sobre los impuestos) y Jo Walker (sobre el gasto).

Kasia Szeniawska ha realizado importantes aportaciones al capítulo sobre impuestos y los siguientes compañeros de ActionAid han realizado aportaciones adicionales: Adedeji Ademefun, Yandura Chipeta, Dinah Fuentesfina, Nkechi Ilochi, Nuzhat Jabin, Philip Kilonzo, Wangari Kinoti, Marcelo Montenegro, Neelanjana Mukhia, Rachel Noble, Lucy Ojiambo, Livia Salles, Devendra Singh, Korto Williams y Everjioice Win.

Agradecemos las recomendaciones y comentarios sobre los borradores recibidos de Gino Brunswijck (Eurodad), Emma Burgisser y Ella Hopkins (Breton Woods Project), Kate Lappin (Public Services International), Max Lawson (Oxfam), Jeannie Manipon y Lidy Nacpil (APMDD), Rachel Moussié (WIEGO), Ruth Pearson (Women's Budget Group) Rick Rowden (Global Financial Integrity), Roosje Saalbrink (Womankind) y Jessica Woodroffe (Gender and Development Network).

Este documento es un resumen del informe «Quién se preocupa por el futuro: Financiar servicios públicos con perspectiva de género» (104 páginas) disponible en la web de ActionAid.

NOTA SOBRE EL COVID-19

Este informe empezó a elaborarse antes de la crisis del covid-19. Ahora resulta evidente que sus conclusiones y recomendaciones son más urgentes que nunca.

Los sistemas de sanidad pública que han recibido una financiación insuficiente durante una generación se han visto desbordados. Gran parte de la carga del cuidado de los enfermos y de los niños/as/as que tienen que permanecer en casa sin ir a la escuela ha recaído en las mujeres, al igual que la tarea de recoger más agua para que las familias puedan lavarse las manos con mayor frecuencia. Las mujeres también predominan en trabajos de primera línea mal pagados, como enfermeras y cuidadoras, enfrentándose a un mayor riesgo de exposición al Covid 19.

Se han revisado algunas secciones de este informe para incluir recomendaciones claras sobre cómo los gobiernos deberían responder al covid-19. En resumen, pedimos a los gobiernos que:

- *Suspendan los pagos de deuda para poder recurrir de forma inmediata a los ingresos de que ya disponen en sus tesorerías para ofrecer una respuesta integral.*
- *Renuncien a las recomendaciones y condiciones del FMI que han llevado a la austeridad y, en particular, que levanten las restricciones sobre las partidas salariales del sector público, de modo que se pueda contratar con urgencia a más personal sanitario y cuidadores/as.*
- *Amplíen las bases impositivas nacionales de manera progresiva, por ejemplo a través de impuestos de emergencia sobre la riqueza, la suspensión de incentivos fiscales y el aumento de los impuestos a las empresas (especialmente cuando haya beneficios extraordinarios).*

Resulta más claro que nunca el vínculo entre unos servicios públicos adecuadamente financiados y con perspectiva de género y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En respuesta al covid-19, existe una demanda cada vez mayor a reformular desde los cimientos la forma en que estructuramos la economía, yendo más allá del simple crecimiento del PIB que hace invisibles los límites planetarios y el trabajo no remunerado de las mujeres. En el futuro tenemos que construir sociedades y economías que se preocupen tanto de las personas como del planeta.

1 INTRODUCCIÓN: POR QUÉ ES TRASCENDENTAL EL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO

Las mujeres y niñas se enfrentan a múltiples cargas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recaen en ellas a través de roles de género patriarcales y el hecho de que los estados modernos no ofrezcan servicios públicos con perspectiva de género. En el desarrollo práctico, existe un abismo cada vez mayor entre el compromiso teórico con la igualdad de género y la realidad de un sistema económico neoliberal que depende de la desproporcionada carga del trabajo doméstico y de cuidados que recae sobre las mujeres. Cuando los gobiernos recortan o no financian de forma adecuada los servicios públicos, son las mujeres las que tienen que asumir una mayor proporción de responsabilidades que requieren mucho tiempo, como cuidar de sus familias, niños/as/as pequeños, personas enfermas y mayores, o caminar cada vez mayores distancias para recoger agua y combustible

Desafortunadamente, las demandas de servicios básicos que pudieran marcar la diferencia en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado suelen estar fragmentadas. Diferentes sectores claman por que se destine un porcentaje mayor de los presupuestos nacionales, en lugar de trabajar juntos para abordar los problemas de financiación estratégicos que generarían cambios en el sistema para todos los servicios públicos. Esto puede cambiar actuando en tres áreas. En primer lugar, con medidas que hagan frente a la ideología de austeridad y economía neoliberal contractiva (como defienden el FMI y el Banco Mundial), de modo que puedan aumentar las inversiones en el sector público y sus trabajadores. En segundo lugar, mediante medidas para abordar la nueva crisis de deuda que asfixia a los presupuestos públicos. Y en tercer lugar, mediante medidas que creen sistemas tributarios más progresivos y con perspectiva de género. Esta combinación de medidas permitiría un cambio radical de inversión en servicios públicos con perspectiva de género, reduciendo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres y aumentando las oportunidades para que las mujeres encuentren un trabajo decente en el sector público.

De forma sorprendente, **los economistas convencionales prestan poca atención** al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, de la misma manera que ignoran en gran medida los límites planetarios. Los cuidados no remunerados todavía no se tienen en cuenta en los cálculos del PIB a pesar de que los economistas hombres (Meade y Stone) que propusieron esta magnitud en 1941 fueron cuestionados casi de inmediato por una economista de su equipo, Phyllis Deane, a partir del análisis que esta había hecho de las realidades del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres en África.¹

Las economistas feministas argumentan que deberían ser los cuidados, y no el capital, lo que se situase en el centro de nuestras preocupaciones. El cuidado de las personas y del planeta es clave para la sostenibilidad de la vida, lo que la mayoría de las personas realmente valora. No obstante, la teoría económica dominante está enfocada en el capital y los mercados, centrándose en el trabajo remunerado, ignorando los límites ambientales y el valor intrínseco de los cuidados. Esto hace que las mujeres y su aportación sean en gran medida invisibles en la economía e ignora gran parte de los cimientos de la supervivencia humana. Esto se agudizará en los próximos años debido a la crisis climática y al aumento de las tasas de dependencia (ya sea de grandes poblaciones de niños/as y jóvenes en África o de las poblaciones envejecidas en Asia, Europa y América). Necesitamos urgentemente repensar los sistemas económicos para integrar completamente el concepto, significado e importancia de los cuidados y reconocer los límites planetarios, rediseñando nuestros marcos de políticas públicas y sociales.

La OIT define el trabajo de cuidados no remunerado como «aquel trabajo no remunerado realizado para man-tener el bienestar, salud y manu-tención de otras personas de un hogar o comunidad»³. El primer informe de la Asamblea General de la ONU sobre los cuidados no remunerados, de Magdalena Sepúlveda en 2013⁴, utilizó una definición de trabajo de cuidados no remunerado que incluye: «trabajo doméstico (preparación de comidas, limpieza, lavado de ropa, recogida de agua y combustible) y cuidado directo de personas (incluidos niños/as, personas mayores y personas con discapacidades, así como adultos sin discapacidades) realizados en los hogares y comunidades». En este informe utilizamos el término «trabajo doméstico y de cuidados no remunerado», el lenguaje que se utiliza ahora en Naciones Unidas.



Unpaid care and domestic work is never-ending. Susan Dakurah, 28, takes a break from doing the laundry to nurse her twin babies, Gabriel and Gabriella Dakurah, as her 4 year old daughter, Blessing Dakurah, looks on. Ghana. Photograph: Deborah Lomotey/ActionAid

Las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en todo el mundo.⁵ Esto limita el tiempo que las mujeres tienen para lograr un trabajo decente, reclamar sus derechos o perseguir sus intereses. De media, las mujeres dedican cuatro horas y 25 minutos al día a trabajo de cuidados no remunerado, en comparación con la media de los hombres, que es tan solo una hora y 23 minutos. Esto está cambiando muy lentamente; de hecho, a menos de un minuto por año en los últimos 15 años . En 2019, la OIT estimó que, según las tendencias actuales, tardaremos 209 años en cerrar la brecha de género del tiempo dedicado a trabajo de cuidados no remunerado, y en 2016 ActionAid calculó que, durante sus vidas, las mujeres trabajan cuatro años más que los hombres . Viéndolo de otra manera, se dedican 16.400 millones de horas al día a trabajo de cuidados no remunerado, lo que equivale a 2.000 millones de personas que trabajan ocho horas al día sin remuneración. Si dichos servicios se valoraran conforme a un salario mínimo por hora, equivaldrían al menos al 9 % del PIB mundial, u 11 billones de dólares.⁸

En 2008, la economista feminista Diane Elson sugirió el marco de **«las tres erres»** (reconocimiento, reducción y redistribución) como medio clave para abordar la injusta contribución de las mujeres en el trabajo de cuidados no remunerado⁹. Este informe se centra de forma especial en la tercera erre: la redistribución. Se puede lograr en parte traspasando las responsabilidades de las mujeres a los hombres, pero se puede lograr de manera más universal mediante la redistribución de las responsabilidades de los hogares al Estado, a través de la prestación de servicios públicos.

Este informe explora las conexiones entre servicios públicos con perspectiva de género y trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Ofrece soluciones prácticas para lograr un cambio radical en la financiación de los servicios públicos mediante actuaciones sobre la deuda, la austeridad y los impuestos. Unos servicios públicos adecuadamente financiados y con perspectiva de género son fundamentales para redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y para generar oportunidades de trabajo decentes para las mujeres.

2 CÓMO LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PUEDEN REDUCIR LAS CARGAS DE TRABAJO NO REMUNERADO

Existen obligaciones claras para todos los gobiernos —recogidas en el derecho internacional¹⁰— de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos a la educación, la sanidad y el agua. La prestación de servicios públicos de calidad es fundamental para cumplir estas obligaciones y hacerlo también puede influir de forma considerable en las cargas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que pesan sobre las mujeres, lo que permitiría a las mujeres acceder al trabajo remunerado (incluso en los propios servicios públicos) y participar plenamente en sus comunidades y en la sociedad en general. La falta de servicios de guardería y educación pública universal gratuita supone que las mujeres pasen muchas horas cuidando sus hijos/as. El acceso inadecuado a los servicios sanitarios supone que se espere que las mujeres cuiden a las personas enfermas, mayores e incapacitadas en el hogar. La ausencia de agua limpia cerca de casa supone que las mujeres pasen horas para recoger agua.

Cuando la financiación de los servicios públicos se ve reducida, la capacidad del estado para cumplir las obligaciones de derechos humanos se ve gravemente socavada y la responsabilidad de cubrir las necesidades recae de forma casi invariable en las mujeres, lo que refuerza las jerarquías y las desigualdades de género. A menudo son aquellas mujeres que tienen menos recursos las que soportan las mayores cargas: las que viven en la pobreza, en áreas rurales o urbanas marginales, o las que se enfrentan a discriminación basada en raza, clase, casta, capacidad, orientación sexual, identidad de género, edad, estado migratorio, etc. La tradicional falta de inversión en los servicios públicos asociados con roles de cuidado (profesorado o sanitario) o los recortes en esos servicios, también afectan a las mujeres de manera desproporcionada, ya que son a menudo una fuente básica de trabajo decente.

2.1 EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL

En la mayoría de las encuestas sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el cuidado de los hijos/as se presenta como una de las responsabilidades que más tiempo consume, particularmente para las mujeres jóvenes. La división de género del trabajo obliga a muchas mujeres a no acceder nunca al trabajo remunerado, a abandonar el trabajo remunerado para cuidar a sus hijos/as o a elegir un trabajo que puedan conciliar con las responsabilidades de cuidado. A menudo, esto lleva a las mujeres a un trabajo mal remunerado, poco cualificado y sin protección sindical, lejos de la definición de trabajo decente de la OIT¹¹. La prestación pública de cuidado temprano y educación infantil puede transformar la vida de las mujeres, permitiéndoles buscar un empleo mejor remunerado, estudiar o dedicarse a sus propios intereses. Mientras que la educación infantil (para niños/as de cuatro o cinco años) se hace cada vez más presente en la agenda internacional, se pone mucho menos énfasis en la educación preescolar (para niños/as de cero a tres años).

Asegurar que las niñas no abandonen la escuela primaria ha sido una prioridad durante muchos años, y aunque los desafíos aún persisten en cuanto a universalización de la escolarización y calidad, el enfoque de las políticas está cambiando en muchos países hacia la educación secundaria. Cuando las niñas terminan la educación secundaria, los efectos pueden ser transformadores,



LEGISLACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN BRASIL

En Brasil, la educación de la primera infancia (incluidas guarderías y preescolar) es un derecho garantizado por la Constitución Federal de 1988 y debe ofrecerse a niños/as de cero a cinco años y a sus familias. Sin embargo, en 2018 solo un tercio de los niños/as brasileños con edades comprendidas entre cero y tres años asistían a guarderías, y 6,7 millones de niños/as todavía no estaban cubiertos por el sistema. Como dato positivo, en la favela de Heliópolis, en Sao Paulo, casi el 99 % de las familias que necesitaban una plaza de guardería obtuvieron una²³. Esta realidad es, en gran medida, el resultado de una sólida historia de lucha comunitaria con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a la educación. ¡Parece que se necesita una combinación de legislación nacional y movilización local para garantizar el derecho a la atención de la primera infancia! No obstante, siguen existiendo desafíos y la movilización debe centrarse ahora en defender los centros de atención infantil frente a los recortes del nuevo gobierno y garantizar una mayor proximidad de los centros a los hogares, horarios más amplios y rutas escolares más seguras.

rompiendo el ciclo intergeneracional de las cargas de los cuidados, como, por ejemplo, reduciendo el embarazo y el matrimonio temprano. Cuando las escuelas han cerrado por períodos prolongados —por ejemplo debido al Coronavirus—, la carga de los cuidados que recae sobre las mujeres aumenta considerablemente.¹³

Lamentablemente, **los esfuerzos actuales se están quedando cortos** en todos los ámbitos:

- La media mundial de acceso a atención de la primera infancia (de cero a tres años) es de solo el 18 %¹⁴, y en su mayoría son de carácter privado, sin regulación, y muy pocos países ofrecen un servicio universal en esta área.
- 150 millones de niños/as de entre tres y cinco años (la mitad de los niños/as de todo el mundo en esta franja de edad) no tienen acceso a educación infantil. En los países de menor renta, solo uno de cada cinco niños/as está escolarizado.¹⁵
- 64 millones de niños/as en edad escolar primaria no están actualmente escolarizados.¹⁶
- Otros 60 millones de niños/as en edad escolar secundaria tampoco están actualmente escolarizados.¹⁷
- Otros 137 millones de niños/as en edad escolar secundaria superior tampoco están actualmente escolarizados.



Fotógrafo Bikash Acharya/ActionAid

La privatización plantea nuevos desafíos, especialmente para las mujeres y niñas más desfavorecidas. En la mayoría de los países, las escuelas primarias y secundarias siguen en su mayoría en el sector público, aunque hay tasas más altas de escuelas privadas en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados¹⁸, y hay enormes presiones esfuerzos para ampliar las escuelas privadas y las concertadas. La privatización de la educación se ha acelerado más a nivel terciario y la educación de la primera infancia sigue siendo principalmente privada. Esto ha propiciado una situación en la que solo quienes pueden pagar la atención y educación de la primera infancia la reciben, a pesar de que los beneficios serían mucho más significativos en los niños/as desfavorecidos¹⁹ y en sus cuidadoras primarias.

Existen **puntos de referencia internacionales bien establecidos** para el gasto en educación. Los gobiernos se han comprometido a dedicar el 20 % del gasto público a educación²⁰, pero actualmente los países de menor renta gastan de media el 14,8 %, y algunos de los países con los mayores desafíos educativos, como Nigeria y Pakistán, destinan menos del 10 % de sus presupuestos nacionales. Existen desafíos particulares en el aumento de la financiación del cuidado y la educación de la primera infancia, con una inversión insuficiente por parte de gobiernos y donantes. Los países tendrían que gastar alrededor del 2 % de su PIB para proporcionar atención y educación universales para la primera infancia, pero en la actualidad se gasta de media menos del 0,1 % del PIB.²¹

2.2 SALUD Y DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS

La atención a familiares enfermos y mayores está ampliamente indicada como parte importante del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a cargo de las mujeres. The Lancet estima que la contribución de las mujeres a la atención médica es equivalente a casi el 5 % del PIB mundial —o 3 billones de dólares a la sanidad mundial—, pero casi la mitad no está remunerada ni reconocida²⁴. El trabajo de atención no remunerado



Orji is an unpaid nurse and midwife in a local hospital with no water source, no electricity and no government funding. Nigeria. Photograph: Tom Saater/Actionaid

relacionado con la sanidad variará según los hogares y la ubicación, desde la atención imprevista de niños/as que sufren enfermedades infantiles recurrentes y de fácil prevención, hasta la atención a largo plazo de familiares mayores enfermos, dependientes o con discapacidades. La carga general de cuidados que esto supone para las mujeres se reduce significativamente cuando hay un sistema de sanidad pública sólido con más personal sanitario, instalaciones adecuadas de buena calidad, buenos servicios de salud sexual y reproductiva, programas de inmunización efectivos, medicamentos asequibles, centros de salud locales más accesibles y más camas de hospital. Los trabajos en el sector sanitario también son cruciales para ofrecer trabajo remunerado a las mujeres, ya que dos tercios de los empleos en el sector sanitario en todo el mundo están ocupados por mujeres, aunque con demasiada frecuencia las mujeres se concentran en puestos de primera línea mal pagados y con malas condiciones.²⁵

A pesar de un ambicioso ODS sobre salud²⁶ que promueve la cobertura sanitaria universal, existen **deficiencias crónicas en la prestación actual de servicios sanitarios** que han quedado expuestas de forma visible por el coronavirus, creando una situación en la que se perpetúa la carga no remunerada de las mujeres como cuidadoras:

- Cada año, 200 millones de mujeres tienen una necesidad no satisfecha de anticonceptivos modernos y 25 millones de abortos no son seguros.²⁷
- En el África subsahariana, el 56 % de todas las muertes estaban relacionadas con enfermedades transmisibles, maternas, perinatales o nutricionales.²⁸
- En 2018, el 22 % de los niños/as de todo el mundo sufrieron retraso en el crecimiento debido a la desnutrición, lo que supone 149 millones de niños/as (uno de cada tres niños/as en el África subsahariana)²⁹.
- El número de médicos/as por cada 100.000 habitantes varía enormemente entre países: desde el extremo superior de 591 en Cuba y 337 en Alemania hasta el extremo inferior de 12 en Zambia, 8 en Uganda y solo 2 en Tanzania.³⁰

El creciente consenso sobre la necesidad de una cobertura sanitaria universal contradice cada vez más las **crecientes amenazas de privatización**. ONU Mujeres observa que «la privatización de la atención médica sin garantía de acceso para todas las personas ha reducido los servicios para las mujeres y les ha impuesto responsabilidades adicionales de cuidado de familiares enfermos. Esto les deja menos tiempo para ocuparse de sí mismas y formarse o buscar un trabajo para mejorar sus vidas».³¹

NIGERIA: CONDICIONES INSALUBRES EN CENTROS DE SALUD

En 2019, ActionAid Nigeria realizó una investigación cualitativa en las regiones norte, centro y sur de Nigeria. Descubrimos que los centros de salud sufren una grave falta de atención y mantenimiento, con estructuras colapsadas y sin equipos médicos básicos, como básculas y termómetros. Documentamos mujeres de parto que esperaban en fila para dar a luz, y que a veces lo hacían directamente sobre el suelo. En Lelyi Gwari, donde había camas disponibles gracias a un proyecto de atención médica financiado por donantes particulares, no había agua corriente. La única fuente de agua era un estanque ubicado a cierta distancia del centro de salud. Los familiares de los pacientes tenían que ir con cubos a ese estanque para que los trabajadores sanitarios tuvieran agua. Se usaban herramientas sin esterilizar y un mismo cubo de agua para atender dos partos.³²

Las estadísticas sobre la **financiación de la sanidad** muestran variaciones sustanciales:

- De media, los países ricos gastan alrededor de 2.000 \$ por persona en sanidad, mientras los países más pobres gastan menos de 30 \$ por persona³³. La OMS es clara al decir que los niveles de gasto público son fundamentales para avanzar en la cobertura sanitaria universal.³⁴
- Mientras los países ricos cada vez destinan un porcentaje mayor de sus presupuestos nacionales a sanidad (ahora un 14,9 %), **los países de menor renta están reduciendo su gasto en sanidad, que ha bajado del 7,9 % en 2000 al 6,8 % en 2017.**³⁵

Es evidente que existe una acuciante necesidad de nuevas inversiones de relevancia en sanidad en los países de menor renta; en caso contrario, el coste de la atención médica —incluida la atención a largo plazo— recae en los hogares, a menudo con efectos catastróficos para quienes no tienen la capacidad de hacer frente a los pagos. El aumento en la inversión en sanidad también puede crear millones de empleos decentes, en especial para las mujeres.

2.3 AGUA Y SANEAMIENTO

Para decenas de millones de mujeres y niñas, abastecerse de agua es un largo y agotador ritual diario. En las áreas rurales, se puede necesitar ir a recoger agua tanto para uso doméstico como agrícola, y puede suponer varias horas todos los días, con múltiples viajes en los que se transporta cantidades descomunales de agua. En las zonas urbanas hay diferentes desafíos, que a menudo son largas colas en las bombas manuales o camiones comunitarios de reparto de agua, y el aumento de los precios. Los sistemas de drenaje y alcantarillado inadecuados, particularmente en las zonas urbanas, pueden ser una causa importante de problemas de salud que exacerban de otras formas las funciones de las mujeres como cuidadoras. La recogida de agua es un trabajo que recae en las mujeres en ocho de cada diez hogares que carecen de agua corriente en el mundo. Oxfam descubrió que en Filipinas, Zimbabue y Uganda, las mujeres con acceso a un mejor suministro de agua dedicaban entre una y cuatro horas menos al día en actividades generales de cuidados.³⁶

Con el ODS 6, los países se comprometen a «garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas en 2030», con ocho objetivos distintos que van desde el acceso al agua hasta la mejora de la calidad del agua, pasando por un mejor saneamiento e higiene. En la práctica, hay muchas lagunas en la prestación actual de WASH (Agua saneamiento e higiene):

- Más del 30 % de las personas carece de acceso a agua potable segura.³⁷
- Más del 60 % de las personas en todo el mundo carecen de acceso a instalaciones de saneamiento seguras.³⁸

Por supuesto, existen enormes desigualdades entre países y dentro de los mismos: la mitad de las personas que beben agua de fuentes no seguras viven en el África subsahariana, y el 80 % de ellas viven en áreas rurales. Las proyecciones sugieren que, con la crisis climática, el número de personas que se enfrenta a escasez grave de agua y estrés hídrico aumentarán en los próximos años.³⁹

En los últimos treinta años, muchos gobiernos han optado por privatizar el suministro de agua, lo que ha tendido a limitar la ampliación de este servicio, particularmente en áreas rurales donde las empresas tienen dificultad para obtener beneficios (ya que los costes de instalación de los sistemas son demasiado altos y las personas son demasiado pobres para pagarlo). Sin embargo, existe un fuerte movimiento para combatir la **privatización del agua**, con numerosos casos de éxito en los que el sector público ha recuperado el control del agua, por lo general en un marco de «remunicipalización».

En los últimos 15 años ha habido al menos 267 casos de remunicipalización del agua en 37 países, de los que se han beneficiado más de 100 millones de personas.⁴⁰

En términos de financiación, el agua y el saneamiento dependen más de la inversión de capital que de los gastos recurrentes, pero hay algunas estadísticas que sorprenden:

- El gasto público medio en agua es de 19\$ por persona, lo que representa menos de un tercio del gasto total en agua, lo que significa que los hogares son los más afectados por los costes.⁴¹
- Existen grandes variaciones en el gasto en WASH per cápita: desde los 152\$ de Sudáfrica hasta los 52\$ de Ghana, 12\$ de Kenia y solo 5\$ por persona en Bangladés y Pakistán.⁴²
- El gasto de los gobiernos en WASH en porcentaje del PIB varía del 3,7 % en Ghana, 2,6 % en Sudáfrica y 1,3 % en Brasil hasta el 0,9 % en Kenia y 0,4 % en Bangladés.
- La OMS estima que cada persona necesita 50 litros de agua por día para sanidad, higiene y usos domésticos. A los consumidores del Reino Unido con agua corriente les costará tan solo 0,09 \$, pero a un residente de Accra (Ghana) le costará 0,54\$ —y de camión cisterna— y Papúa-Nueva Guinea 2,22\$.⁴³
- El 80 % de los países indican que no disponen de la financiación pública necesaria para alcanzar los objetivos de los ODS relativos a agua, saneamiento e higiene.⁴⁴

Es evidente la necesidad de un cambio radical en la financiación del agua para cumplir los objetivos de los ODS.

2.4 HACIA UN MARCO COMÚN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Este informe no puede abordar todos los servicios públicos que pueden influir de forma importante en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres. La energía, la agricultura y el transporte público también merecen atención (y se mencionan brevemente en el informe principal), al igual que las inversiones en protección social. Sin embargo, se pueden observar tendencias e hilos comunes significativos en los servicios públicos.

- Cuando los servicios públicos son inadecuados o no tienen en cuenta las cuestiones de género, aumenta el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres.
- Se han establecido objetivos ambiciosos (los últimos con los ODS) para universalizar el acceso a los servicios de manera equitativa, pero dichos objetivos están aún lejos de cumplirse debido a la falta crónica de fondos.
- Hay una marea creciente de privatizaciones⁴⁵ que amenaza con empeorar el limitado acceso de las mujeres a los servicios (cuando se cambian las tarifas, las mujeres y las niñas suelen ser las primeras en quedar excluidas).
- A menudo se enfrenta a los diferentes servicios públicos entre sí, como si la única forma de obtener más dinero para un servicio fuera quitárselo a otro.

Public Services International (la federación sindical mundial que representa a más de 30 millones de trabajadores del sector público) ha defendido con decisión que se promuevan los derechos de las mujeres a través de servicios públicos con perspectiva de género bien financiados⁴⁶. ActionAid se hace eco de ello al elaborar un enfoque de servicios públicos con perspectiva de género⁴⁷ con cuatro pilares fundamentales. Los servicios deberían ser:

1 Financiados con fondos públicos

- Con una cuota presupuestaria justa para servicios clave.
- Con un buen presupuesto general (una base impositiva progresiva/políticas macroeconómicas).
- Con sensibilidad en las asignaciones presupuestarias (guiadas por un enfoque en la equidad).
- Con un escrutinio efectivo del gasto (para que los fondos lleguen a su destino y se gasten correctamente).

2 De carácter público y universal

- Verdaderamente responsables.
- Descentralizados, pero con un fuerte centro de redistribución.
- No privatizados ni comercializados.

3 Con perspectiva de género

- Sin discriminación ni sexismo.
- Seguros para todos los usuarios.
- Desarrollados y supervisados mediante procesos inclusivos de participación.

4 Calidad en línea con los marcos de derechos humanos

- Accesibles, disponibles, adaptables y aceptables.

Este informe se centra en temas críticos que afectan a la financiación de todos los servicios públicos con perspectiva de género. Demuestra que las medidas que aborden la deuda, la austeridad y la justicia fiscal serán fundamentales para liberar recursos para el importante crecimiento de las inversiones en servicios públicos con perspectiva de género. Esta es la clave para lograr una redistribución transformadora de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres.

3 REPERCUSIONES DE LA NUEVA CRISIS DE DEUDA EN EL GASTO PÚBLICO

¿Cómo puede aumentar un gobierno el gasto en servicios públicos con perspectiva de género cuando un porcentaje significativo de su gasto desaparece en pagar las deudas pasadas? Esta es la realidad a la que se enfrenta un número cada vez mayor de países en esta nueva crisis mundial de deuda.

La deuda es una herramienta fundamental para los gobiernos, y los países en vías de desarrollo no son una excepción. Los gobiernos tienen que acudir a préstamos para poder desarrollar sus países, y los países en vías de desarrollo en particular tienen que acudir a los préstamos para invertir en la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, en el caso de la deuda, es muy cierto que el exceso de algo bueno puede ser malo, ya que son las crisis de deuda de los años ochenta y noventa las que obligaron a los países a aceptar los programas de austeridad del FMI que socavaron el desarrollo en África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, donde hay aún muchos países recuperándose. Ahora existe una preocupación cada vez mayor, incluso por parte del FMI (y de forma más enfática por parte de la UNCTAD), de que es inminente una nueva crisis de deuda en los países en vías de desarrollo.⁴⁸

«Crisis de deuda» es un término familiar en los países en vías de desarrollo. Desde finales de la década de 1970, la carga de la deuda hundi6 a los países de América Latina, Asia y África en décadas de recesión financiera y regresión social. A fines de la década de 1990, los países destinaban tanto al pago de su deuda externa (alrededor del 16 % de sus ingresos en 1998) que la deuda se identificó como uno de los escollos principales para lograr una financiación adecuada de los servicios públicos, y las condiciones del FMI agravaron ese problema. La campaña de la sociedad civil conocida como Jubilee 2000 se formó a mediados de la década de 1990 y consiguió algunos logros, como que el FMI y el Banco Mundial pusieran en marcha programas de alivio de la deuda. Primero llegó la Iniciativa HIPC (países pobres altamente endeudados) a fines de la década de 1990, y en 2005 la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDRI). Para 2006, muchos países habían reducido significativamente la carga de la deuda, y con el aumento de los precios de los productos básicos, la media de pagos alcanzó en 2011 su nivel más bajo (5,4 % de los ingresos públicos).⁴⁹

Sin embargo, la cantidad de ingresos que los gobiernos dedican al pago de la deuda ha aumentado considerablemente en los últimos años. En 2019, el movimiento británico Jubilee Debt Campaign (JDC) determinó que los pagos de la deuda externa de los países en vías de desarrollo habían crecido un 85 % entre 2010 y 2018, pasando del 6,6 % al 12,2 % de los ingresos públicos⁵⁰. Pero la distribución es desigual y **21 países dedican ya más del 20 % de sus ingresos públicos a pagar la deuda, y Angola y Ghana dedican más del 55 %**. En el último informe Global Sovereign Debt Monitor se indica que 122 de los 154 países analizados deben considerarse «altamente endeudados».⁵¹

ORIGEN DE LA NUEVA CRISIS DE DEUDA

No existe una razón única por la que la deuda haya aumentado de nuevo de forma tan rápida, pero algunos de los componentes son similares a los del pasado: el legado del colonialismo, las condiciones comerciales bajo las reglas de la OMC, la caída de los precios de los productos básicos, las dificultades para recaudar más ingresos mediante impuestos, las condiciones y recomendaciones del FMI, la proliferación de asociaciones público-privadas (APP) que aumentan el riesgo de los gobiernos, el descenso de la ayuda oficial y el aumento de los desastres naturales debido a la emergencia climática. No obstante, algunos factores son nuevos: unos tipos de interés históricamente bajos en los países desarrollados hicieron más atractivo conceder préstamos a países en vías de desarrollo a tipos más altas, lo que significa que los prestamistas les endosaron los préstamos a los gobiernos y los gobiernos encontraron compradores para sus emisiones de bonos (eurobonos). Hoy en día, gran parte de la deuda que tienen los países en vías de desarrollo es con China o con inversores privados, lo que hace que la solución de la nueva crisis sea más compleja.

Esta nueva crisis de deuda está afectando al gasto público en los países en vías de desarrollo, lo que afecta al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres. Junto con Jubilee Debt, examinamos 60 países con rentas medias y bajas, centrándonos en aquellos países que superan lo que el FMI llamaría riesgo de deuda «moderado»⁵², que, según nuestros cálculos, son países que dedican más del 13 % de sus ingresos al pago de la deuda. **En los 30 países (la mitad del total) con mayor porcentaje del gasto público dedicado al pago de la deuda (más del 13 %), el gasto público real por persona (teniendo en cuenta la inflación) cayó un 6 % entre 2015 y 2018. En los 30 países con pagos de deuda por debajo del 13 % de los ingresos públicos, el gasto público por persona aumentó un 14 %**⁵³. Esto deja muy claro que un mayor gasto en deuda conlleva un menor gasto en servicios públicos, y esto a su vez conlleva el mantenimiento (e incluso la agudización) de la explotación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres para llenar las lagunas.

Para explorar esto más a fondo, comparamos la cantidad que se proyecta que los países dediquen al pago de la deuda en 2019 con la cantidad que se proyecta que dediquen a sanidad y educación. Descubrimos que **varios países (República del Congo, Gambia, Ghana, Kenia, Zambia y Sierra Leona) gastan más en el pago de la deuda que en sanidad y educación juntas**, y muchos otros países gastan el equivalente a más de la mitad de su presupuesto total de sanidad y educación solo para pagar sus deudas. Esto es claramente insostenible.

Por último, estimamos de cuánto dinero extra habrían dispuesto los países para añadir a sus presupuestos generales para servicios públicos (incluida sanidad, educación, agua y otros) en 2019 si el pago de la deuda se hubiese reducido al máximo aceptable del 12 % de los ingresos públicos (en aquellos países que gastan más en 2019). Descubrimos que, por ejemplo, **Bangladés y Ghana habrían tenido más de 5.000 millones de dólares para invertir en servicios públicos cada año**, y Kenia habría tenido más de 4.000 millones de dólares en ingresos adicionales al año. Estos importes serían transformadores si se invirtiesen en servicios públicos.

Es obvio que se debe hacer algo para hacer frente a la nueva crisis de deuda, pero la «comunidad internacional» (incluido el FMI) parece tener poco o ningún interés en aplicar otra ronda de alivio de la deuda. Pasaron más de veinte años entre que se reconoció de forma generalizada la última crisis de y que se adoptaron medidas significativas para los países en vías de desarrollo. No podemos permitir que el desarrollo pierda otras dos décadas.

¿QUÉ PODRÍAN SIGNIFICAR ESTOS INGRESOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO?

En **Bangladés**, el pago de la deuda representa actualmente el 29 % de los ingresos públicos, lo que equivale al 86 % de los presupuestos de sanidad y educación juntos. Si se renegocia para que no supere el 12 %, esto permitiría disponer de 5.500 millones de dólares adicionales para gastar en servicios públicos. De esta forma se podría pagar el sueldo medio de más de 60.000 médicos/as residentes o 115.000 enfermeros/as.⁵⁴

Ghana tiene uno de los gastos de pago de la deuda más altos del mundo, con el 59 % de su PIB. Si ese porcentaje se redujera al 12 %, Ghana podría pagar los salarios de 200.000 matronas cualificadas cada año.

Kenia tiene un gasto de pago de la deuda muy alto (36 % del PIB en 2019), por lo que se destina la misma cantidad de dinero a pagar la deuda que a educación y sanidad juntas. Si esa cifra se redujera al 12 %, Kenia dispondría de 4.400 millones de dólares adicionales que destinar a servicios públicos. Con tan solo una cuarta parte de ese dinero se podría pagar a 96.345 profesores/as de primaria y secundaria que se necesitan con urgencia.^{55 56}

AVANCES EN LA DEUDA

Hay nuevas esperanzas con respecto a la deuda. El reconocimiento de la «deuda climática», causada por el creciente número de desastres naturales, ha abierto el debate sobre un nuevo mecanismo automático de financiación (incluido el alivio de la deuda) que formará parte del Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños, dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.⁵⁷ Hay un impulso cada vez mayor en torno a los procesos de reforma de los procesos de contratación de deuda con el fin de evitar futuras crisis (por ejemplo, recurriendo a la Carta de Finanzas Responsables de Eurodad⁵⁸). La demanda de acción podría dispararse rápidamente si los países con altos niveles de deuda emitieran amenazas creíbles de desconocimiento de la deuda o impago, que es la única baza que tienen muchos países. Los **procesos de reprogramación de deudas** pueden ser más realistas. Eurodad ha realizado una gran labor para definir cómo debería ser un «mecanismo de reducción de la deuda». De una forma u otra, hoy queda patente —al igual que en la última crisis de deuda— que ha llegado el momento de actuar para darle la vuelta a la nueva crisis de deuda y evitar crisis similares en el futuro.

4 LA INFLUENCIA DEL FMI EN EL GASTO PÚBLICO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido durante mucho tiempo una de las **fuerzas más poderosas** a la hora de diseñar políticas económicas que han seguido los países en vías de desarrollo (y muchos países emergentes y desarrollados). Estas políticas tienen una profunda repercusión en los recursos disponibles para servicios públicos con perspectiva de género.

El FMI, institución multilateral fundada en 1944, tenía en origen la limitada función de supervisar la valoración de moneda de sus países miembro. Asumió un papel destacado en el diseño de las políticas económicas generales de los países desde finales de la década de 1970, cuando comenzó a proporcionar a los países con alto nivel de deuda los llamados «rescates». Los gobiernos utilizaron los rescates para pagar a los acreedores, pero quedaron sujetos a condiciones estrictas que se denominaron programas de austeridad o, como los llamaba el FMI anteriormente, programas de ajuste estructural (PAE). El incumplimiento de las condiciones del FMI podía (y aún puede) conllevar la suspensión o cancelación de préstamos y perjudicar la reputación del país ante los inversores y demás acreedores. Se ha demostrado que esas condiciones tienen una serie de efectos secundarios nocivos para los países, especialmente para nuestros propósitos, limitando en gran medida la capacidad de los gobiernos de países en vías de desarrollo de pagar servicios públicos de calidad con perspectiva de género.

Aunque el FMI dejó de usar el término «ajuste estructural» con el cambio de milenio, **no han cambiado mucho la dinámica de poder entre la institución y los gobiernos ni las políticas económicas en sí**⁵⁹. No sorprende, ya que el FMI está gobernado por un directorio ejecutivo en el que los países más ricos tienen la mayor parte del poder, y Estados Unidos —como mayor «accionista»— tiene poder de veto sobre todas las decisiones importantes⁶⁰.

Para comprender cuánto han cambiado (o no) las directrices o las condiciones de préstamo del FMI, examinamos 56 países (todos con rentas bajas y una selección transversal de países con rentas medias⁶¹), analizando lo que el FMI decía con respecto a los objetivos salariales, de déficit y de inflación, las cuestiones de género, el gasto social y las cuestiones laborales. Se analizó la documentación de los préstamos a países con programas en vigor o que no finalizaron antes de 2017. Está claro que los criterios por los que tanto el FMI como otros acreedores e inversores juzgan a un país no se limitan a condiciones «oficiales», como parámetros estructurales o resultados⁶². Por ello, **adoptamos de forma consciente un enfoque amplio con respecto a las condiciones del FMI, tratando por igual todas las recomendaciones del FMI, incluidas las condiciones de préstamo oficiales.**

En resumen, descubrimos que, al igual que en las décadas de 1980 y 1990⁶³, **el FMI continúa insistiendo en que los gobiernos superen o eviten las crisis de deuda mediante la adopción de políticas que contraen sus economías**, con estrictos límites del gasto público, limitando los déficits fiscales y manteniendo baja la inflación, generalmente alrededor del 5 %. La corriente ideológica del FMI se denomina «neoliberalismo», un sistema que favorece un comercio y mercados supuestamente «libres», pero que terminan siendo completamente libres para aquellos que comienzan con la mayoría de los recursos, y una prisión para el resto.

La era de los ajustes estructurales supuso que el gasto público en los países en vías de desarrollo cayera del 19 % del PIB en 1981 al 16 % en 1998. Parecía (y sigue pareciendo) asumirse que este tipo de caída se recuperaría con la inversión privada atraída por la estabilidad económica e incentivos tales como los bajos tipos impositivos para sociedades y entidades público-privadas.⁶⁴ No ha sido así, y aun cuando hubiese sido así, ya hemos señalado las razones para preferir los servicios públicos universales a los sistemas con ánimo de lucro.

Nuestra preocupación fundamental es que una institución extremadamente poderosa (el FMI) reciba el encargo del sistema financiero internacional de establecer directrices para la política económica de los países en vías de desarrollo y que lo haga desde la obligación de mantener determinados indicadores en unos límites que ella misma juzga «sólidos» para los sistemas capitalistas neoliberales.

RESULTADOS CLAVE DE NUESTRA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL FMI

En nuestra revisión de las fichas país del FMI, descubrimos que el FMI recomendó reducir los déficits en el 70 % de los 27 países con rentas bajas (PRB) con datos adecuados, reducir las tasas de inflación en el 75 % de aquellos PRB cuya moneda no está referenciada al euro, y reducir el gasto salarial en un 30 % de los PRB con datos adecuados, al tiempo que reclamaba una congelación efectiva en un 48 % adicional. De este modo, se advierte a más de las tres cuartas partes de los PRB que no mejoren los servicios públicos contratando a más personal, aun con el fin de ajustarse al aumento de población.

Sostenemos que los gobiernos tienen una obligación más amplia: evitar crisis financieras y económicas, sí, pero hacer del bienestar general de sus ciudadanos y el medio ambiente su primera prioridad. En otras palabras: abogamos por alejarnos de las directrices neoliberales en favor de una perspectiva basada en los derechos y construir economías que se preocupen tanto de las personas como del planeta.

Lo que necesitan los países en vías de desarrollo es una inversión significativa en servicios públicos de calidad, universales, accesibles y con perspectiva de género. Los trabajadores públicos, proveedores clave de servicios públicos, deben ser adecuados en número, disponer de buena formación y recibir una remuneración justa. Gastar en servicios públicos de calidad, incluidas las personas que los hacen posibles, es, más que un gasto, una inversión. Aquellos que terminan siendo más explotados cuando los servicios públicos no cuentan con los recursos suficientes son las mujeres, quienes pierden oportunidades de trabajo decente y cuya carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado termina apuntalando una economía injusta y socavando el desarrollo económico nacional.

4.1 INFLACIÓN

En lo relativo a la inflación, analizamos las últimas publicaciones que cuestionan cada vez más la obsesión del FMI de mantener la inflación por debajo del 5 %. Si bien nadie aboga por la hiperinflación, existen amplias pruebas de que las políticas que persiguen mantener la inflación muy baja evitan el crecimiento económico, lo que socava los esfuerzos por aumentar la inversión pública al nivel necesario para alcanzar los ODS. Muchos economistas defienden que la tasa de inflación óptima para los países en vías de desarrollo puede situarse entre el 10 % y el 20 %, y que tasas como estas no tendrían consecuencias negativas.⁶⁵

Después confeccionamos una tabla que recoge los últimos datos de la tasa de inflación (FMI, octubre de 2019) de 55 países, y que muestra la dirección de las recomendaciones del FMI (reducirla, mantenerla estable o, en los menos casos, aumentarla). Solo cuatro de los 55 países (Sudán, Sudán del Sur, Zimbabue y Argentina) con datos fiables se encuentran claramente en zona de peligro en lo que a inflación se refiere, pero también se enfrentan a importantes crisis sociales. Se puede considerar que el resto de países tienen una inflación moderada o baja (36 países tienen tasas inferiores al 10 %). **A pesar de que la mayoría de países se encuentran en lo que se considera zona segura para la inflación, el FMI recomienda congelar la inflación a las tasas actuales (en 17 países, el 31 %) o reducir aún más la inflación (en 26 países, el 47 %, incluida la mayoría de los países de rentas bajas).**

De esta forma se comprime el espacio para inversión pública que se necesita para alcanzar los ODS, ya que los países temen que gastar significativamente más en servicios públicos pudiese aumentar la inflación y, aunque puede existir un riesgo moderado de que así sea, se suele exagerar el mismo.

4.2 DÉFICITS

Los déficits están estrechamente relacionados con la deuda, especialmente con la deuda externa. Un elevado nivel de deuda suele ser lo que obliga a los países a solicitar ayuda al FMI, por lo que los niveles de déficit se vigilan de cerca, tanto en relación con la evolución de la deuda como para garantizar que haya suficiente capital para devolver la deuda según lo acordado. El FMI presiona mucho a los países para que reduzcan sus déficits, especialmente aquellos países con altos niveles de deuda. No obstante, al adoptar un enfoque a corto plazo (pagar las deudas, reducir los déficits), los gobiernos, guiados por el FMI, corren el riesgo de hipotecar el futuro a más largo plazo. El gasto en servicios básicos, como educación, sanidad, agua y saneamiento, puede causar el aumento del déficit ahora, pero sin esos servicios, las posibilidades de que un país crezca y se desarrolle a medio o largo plazo se ven seriamente mermadas.

Analizamos la última recomendación sobre política del FMI y hallamos una trayectoria descendente continua: **el FMI espera que el 70 % de los 27 PRB con datos adecuados reduzcan su déficit y que otro 26 % lo mantengan al nivel actual, a pesar de la necesidad de aumentar considerablemente el gasto en servicios públicos de calidad** en prácticamente todos ellos. Solo se recomienda a uno de los PRB, Afganistán, que aumente su déficit, que ya es cercano a cero. Incluso se pronosticó que algunos PRB (Chad, Gambia, Togo, Malawi, Benín y la República Centroafricana) registrarían superávit en 2020, lo que parece particularmente problemático, ya que estos países están muy lejos de alcanzar los ODS. A nueve de los países de renta media (PRM) que revisamos también se les instó a lograr superávit.

4.3 CONTENCIÓN SALARIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

En ninguna parte la preferencia del FMI por la ortodoxia económica frente a los bienes públicos queda tan clara como en sus restricciones al gasto salarial del sector público. **La posición del FMI sobre los salarios tiene serias repercusiones en la capacidad de los países de invertir más en servicios públicos, cubrir los derechos básicos y alcanzar los ODS.** Los grupos salariales más grandes del sector público corresponden a trabajadores/as de los sectores educativo y sanitario (profesorado, personal sanitario), y toda ampliación de los servicios públicos —para lograr la educación básica universal, ampliar la atención de la primera infancia o de los mayores, por ejemplo— requerirá un aumento sustancial de las personas en la nómina del gobierno. En muchos países también existe una urgente necesidad de mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores del sector público.

Después de que **ActionAid y otras entidades hicieran campaña contra los topes salariales en 2006 y 2007⁶⁶**, el FMI los redujo, anunciando que acogía «con satisfacción la disminución de la incidencia de tales límites en los programas respaldados por el Fondo» y esperaba prescindir de ellos por completo⁶⁷. Pero aunque los topes salariales se volvieron menos comunes, la recomendación del FMI sobre limitar el gasto con déficit y las tasas de inflación tuvo prácticamente la misma repercusión sobre el gasto público. El FMI ha dado marcha atrás de forma más explícita en su promesa de 2007, pero hoy suele usar el término «contención» en lugar de «tope».

Limitar, congelar o reducir los salarios del sector público tiene dos consecuencias directas: reduce la capacidad del gobierno de ofrecer servicios públicos y eleva las tasas de desempleo. Ambas afectan de forma desproporcionada a las mujeres, que generalmente cumplen el papel de aquellos servicios inexistentes y representan un porcentaje sustancial de los trabajadores sujetos a despidos, subcontratación o reducción de beneficios.

En nuestra nueva revisión de las fichas país del FMI, constatamos que de 23 PRB con información suficiente para identificar tendencias, se esperaba que tan solo cinco de ellos (22 %) experimentasen un aumento del gasto en salarios públicos, siete (30 %) sufrirían recortes en este apartado y once (48 %) los mantendrían congelados de forma efectiva. Para aquellos países con una clara necesidad de aumentar los servicios públicos, la noticia de que casi el 80 % no experimentará ningún aumento en el número de empleados públicos es profundamente inquietante.

La presión del FMI para contener el gasto salarial público debe reconocerse por lo que es: una clara contradicción de la aspiración de alcanzar los ODS y cumplir derechos. La congelación o reducción del gasto salarial público debería ser totalmente inaceptable para países con escasez de maestros, médicos, enfermeros y otros empleados públicos de primera línea.

PUBLIC SECTOR WAGE BILLS AND THE DIRECTION OF IMF ADVICE

PAÍS	GASTO EN SUELDOS PÚBLICOS EN 2019 en % del PIB / recom. FMI (↑↓↔) / variación prevista (%)
------	--

LICs	
Sudán del Sur	2,6 ↑ (+4,8)
Nepal	3,1 ↓ (-1,0)
Somalia	3,2 ↑ (+0,3)
Guinea	3,6 ↔
Uganda	3,9 ↔
Guinea-Bisáu	4,7 ↑ (+0,7)
Rep. Centroafricana	4,7 ↔
Gambia	4,8 ↓ (-0,3)
Níger	5,1 ↑ (+0,5)
Tanzania	5,1 ↔
Comoras	5,5 ↑ (+0,8)
Madagascar	5,7 ↔
Mali	5,8 ↔
Ruanda	5,8 ↔
Sierra Leona	6,2 ↓ (-0,9)
Benín	6,3 ↔
Chad	6,7 ↓ (-1,3)
Togo	6,7 ↔
Malawi	7,4 ↔
Burkina Faso	9,9 ↓ (-1,5)
Liberia	10 ↓ (-1,7)
Mozambique	11,6 ↓ (-1,5)
Afganistán	13,1 ↔

PAÍS	GASTO EN SUELDOS PÚBLICOS EN 2019 / recom. FMI (↑↓↔) / variación prevista (ptos. percent.)
------	--

LMICs	
India	1,1 ↔
Sudán	3,5 ↔
Birmania	3,9 ↔
Guatemala	4 ↔
Kenia	4,5 ↔
Filipinas	5 ↔
Indonesia	5,5 ↔
Ghana	6,6 ↔
Camboya	7,5 ↑ (+0,4)
Zambia	8,4 ↓ (-0,4)
Bolivia	11,7 ↓ (-0,4)

UMICs	
Argentina	3,4 ↓ (-0,5)
Colombia	5 ↔
Jordania	5,1 ↔
Mauricio	6,2 ↔
Tailandia	6,3 ↔
Jamaica	9,1 ↓ (-0,3)
Ecuador	9,4 ↓ (-0,5)
Sudáfrica	11,6 ↔
Brasil	13 ↓ *

Fuente: Análisis de las fichas país del FMI. Todas las cifras salariales en % del PIB; cambio en la variación porcentual prevista a partir de los datos de 2019.

*No se ofrece ninguna proyección de la reducción para Brasil, pero se recomienda congelar la contratación durante cinco años.

OBSERVACIÓN: Nuestro informe completo detalla algunas áreas adicionales en las que el FMI da recomendaciones en temas ajenos a su función, como abordar programas sociales, tratar la desigualdad de género y asesorar sobre el mercado laboral.

4.4 AVANCES SOBRE EL FMI

Los gobiernos nacionales deben abordar las conversaciones con el FMI como auténticas negociaciones, con los derechos humanos de su ciudadanía y la corrección de las desigualdades de género y otras desigualdades sociales como sus principales puntos. Aunque resulta una locura intentar formular recomendaciones de políticas generales, entendemos que **los negociadores de los gobiernos deberían:**

- Oponerse a la imposición de objetivos de inflación por debajo del 5 % y defender firmemente que las tasas de inflación puedan llegar hasta el 20 %, siempre que mejore la buena gestión y aumenten los recursos para las necesidades de desarrollo a largo plazo de las personas.
- Reconocer que el gasto deficitario es una herramienta vital; toda sugerencia de que los gobiernos deberían reducir sus déficits por debajo del 3 % debe ser objeto de un profundo estudio sobre su repercusión en el desarrollo.
- Insistir en aumentar el gasto en empleados públicos, haciendo que la ampliación y mejora de los servicios públicos sea una prioridad.
- Evitar instrumentalizar a las mujeres en las políticas económicas.

El propio FMI también necesita una reforma, llevando a cabo evaluaciones de impacto en los Derechos Humanos con perspectiva de género⁶⁸, estableciendo un mecanismo de rendición de cuentas independiente que acepte las quejas de las comunidades afectadas⁶⁹ y evitando imponer más condiciones a los prestatarios que el pago completo dentro del plazo acordado⁷⁰. Es hora de que el FMI aborde directamente la contradicción de promover un modelo económico que depende del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres, pero que no reconoce esa realidad, tratando los cuidados no remunerados de las mujeres como una externalidad ilimitada. Como deja en claro la crisis climática, ¡no existen los recursos ilimitados!



4.5 CÓMO DEBERÍAN FINANCIAR LOS GOBIERNOS Y EL FMI

LA RESPUESTA AL COVID-19

La pandemia del coronavirus surgió en el periodo entre la redacción de este informe y su edición para su publicación. La pandemia hace que nuestras pruebas y análisis relacionados con el FMI sean más urgentes que nunca. La falta crónica de financiación adecuada de los sectores públicos de sanidad, agua, educación y cuidado infantil ha impedido que la mayoría de los países en vías de desarrollo dispongan del equipamiento necesario para hacer frente a la pandemia. Con respecto al FMI, recomendamos lo siguiente:

- Los gobiernos de los países en vías de desarrollo deberían suspender todos los pagos de deuda a todos los acreedores (públicos, privados y FMI) como mínimo hasta 2021 y renegociar radicalmente el pago de la deuda a partir de entonces para garantizar que nunca paguen un total que supere el 12 % de sus presupuestos nacionales. Esto dará a los gobiernos acceso inmediato al dinero que ya se encuentra en sus tesorerías. (Más recomendaciones en el capítulo sobre la deuda).
- Los gobiernos de los países en vías de desarrollo deberían anunciar —de forma multilateral si es posible— que dejarán de cumplir las recomendaciones y condiciones sobre política del FMI cuando estas obstaculicen su capacidad de movilizar recursos para proteger a los ciudadanos y brindar una respuesta integral ante la pandemia. Esto implicaría levantar de inmediato las restricciones sobre los salarios públicos para que se puedan contratar más médicos, enfermeros y cuidadores.
- Los gobiernos de los países en vías de desarrollo también deberían tomar en consideración algunas de las recomendaciones progresivas formuladas por el FMI tras el covid-19, entre las que se encuentran la reducción de los tipos de interés, las ayudas salariales para empresas y particulares, la «contratación extraordinaria» en el sector sanitario, la ampliación de las prestaciones por desempleo y las ayudas a las personas sin recursos.
- Los gobiernos de los países en vías de desarrollo deberían rescatar a las personas y pequeñas y medianas empresas más vulnerables (que dan empleo a más del 80 % de las personas a nivel mundial) en lugar de a las grandes corporaciones. Se debe exigir a todas las empresas que reciben rescates que garanticen los derechos laborales y renuncien a los bonus, dividendos y recompras de acciones y participaciones.
- Los gobiernos deberían adoptar medidas urgentes para aumentar su base impositiva nacional de manera justa y progresiva (más recomendaciones sobre impuestos en el apartado 5.3).
- Los gobiernos deberían prohibir la práctica de la venta en corto (apostar por la caída del precio de una acción) e implantar controles de capital para evitar la fuga de capitales a gran escala.
- El propio FMI debería aumentar la liquidez global de forma urgente a través de una importante asignación de «derechos especiales de giro», tal y como se hizo en respuesta a la crisis financiera mundial. Esto se debería llevar a cabo a gran escala, con unos 3 billones de derechos especiales de giro (equivalentes a aproximadamente 4,1 billones de dólares) que, por ejemplo, pondrían 250.000 millones de dólares a disposición de los bancos centrales africanos.
- Es hora de fomentar la creación de impuestos sobre las operaciones financieras para reducir el comercio automatizado y de alta frecuencia, y recaudar fondos que se puedan agrupar y compartir a nivel mundial.

5 EL POTENCIAL EFECTO DE LAS REFORMAS FISCALES PROGRESIVAS

El aumento de la deuda, la constante austeridad y las limitaciones de los salarios públicos están socavando la capacidad de los países de financiar servicios públicos con perspectiva de género. Pero hay un área en la que los países pueden hacer avances significativos para aumentar los ingresos disponibles para servicios básicos: con medidas de justicia fiscal. Los impuestos son ampliamente reconocidos como la forma más fiable, sostenible y democrática de financiar los presupuestos del estado y los servicios públicos. Si bien las ayudas y los préstamos pueden proporcionar apoyo provisional, no son una solución sostenible (especialmente porque los niveles de ayuda han disminuido en todo el mundo⁷¹) y a menudo vienen con condiciones que añaden nuevos problemas.

No existe una respuesta única a la pregunta de cuántos impuestos debe recaudar un país, pero **la mayoría de los países en vías de desarrollo deberían tener como objetivo aumentar sus ingresos fiscales**. Según la ONU, se necesita una presión fiscal mínima del 20 % para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible⁷². En la actualidad, la presión fiscal media en los países de rentas bajas se mantiene por debajo del 17 %, y países como Nigeria y Pakistán aún luchan por lograr que su presión fiscal llegue al 10 %⁷³ (no sorprende que estos dos países tengan más niños/as sin escolarizar que cualquier otro país). Esto contrasta con los PRMB, que tienen una presión fiscal media del 25 %⁷⁴, la OCDE, que tiene una media del 34 % y los países escandinavos, que suelen tener más del 40 %⁷⁵. En su reciente análisis de financiación de los ODS⁷⁶, el FMI sugiere que muchos países podrían aumentar su presión fiscal un 5 % a medio plazo (alrededor de cinco años) a través de una combinación de políticas fiscales y medidas de administración tributaria. En algunos países son realistas objetivos aún más ambiciosos. Siguiendo esta lógica, es posible que muchos países puedan aumentar su presión fiscal un 1 % al año o un 10 % en los próximos diez años, proporcionando una base viable para financiar los servicios públicos universales en 2030, fecha límite para los ODS.

5.1 IMPUESTOS PROGRESIVOS

El aumento de los ingresos mediante impuestos es crucial, pero también es importante cómo se hace, ya que no todos los impuestos son iguales. Algunos impuestos son regresivos, y repercuten en quienes menos pueden pagar. Un sistema impositivo progresivo, donde aquellos con más recursos contribuyen proporcionalmente más que aquellos con menos, requiere una combinación bien diseñada de impuestos bien diseñados. Los impuestos directos, como los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades, y diferentes impuestos sobre el patrimonio suelen ser progresivos, mientras que los impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o la mayoría de los impuestos especiales suelen ser regresivos. Por desgracia, **los sistemas impositivos se han vuelto menos progresivos a nivel mundial** desde la década de 1980⁷⁷, y los países en vías de desarrollo tienen de media sistemas impositivos menos progresivos y redistributivos que los países de la OCDE⁷⁸. En gran parte, esto ha surgido de las recomendaciones generales del FMI sobre políticas, que recomendó a los países en vías de desarrollo sustituir los ingresos que dejaron de percibir por aranceles (eliminados tras las presiones para liberalizar el comercio) con ingresos del IVA (que es relativamente fácil de recaudar, pero es regresivo)⁷⁹. Por desgracia, las recomendaciones que el FMI ha hecho hasta ahora sobre política fiscal no han conllevado necesariamente un aumento de los ingresos fiscales, sino más bien un cambio en la composición de los impuestos, de directos a indirectos⁸⁰. Las recomendaciones del FMI sobre políticas fiscales están ahora más matizadas, pero rara vez tienen en cuenta la progresividad.⁸¹

Si bien el sesgo explícito de género se ha vuelto poco habitual en los códigos de impuestos de todo el mundo, **los impuestos pueden seguir afectando indirectamente a hombres y mujeres de diferentes maneras** debido a los diferentes patrones de empleo, propiedad y gasto. En general, debido a que las mujeres están sobrerrepresentadas en la población pobre, los impuestos regresivos les afectan de forma desproporcionada. El insuficiente uso y aplicación de los impuestos sobre el patrimonio y la renta también tienen un sesgo implícito, ya que los hombres tienen más probabilidades de poseer patrimonio, trabajos formales y salarios más altos.⁸²

Revisamos la bibliografía para identificar historias de éxito de países que han aumentado sus ingresos fiscales de forma rápida. Nepal aumentó su presión fiscal de menos del 10 % en 2000 a más del 20 % en 2017⁸³ gracias a la introducción de nuevos impuestos y la modernización de su administración tributaria.⁸⁴ Mongolia aumentó su presión fiscal de poco más del 15 % al 26 %, en gran

parte gracias a la mejora de los impuestos sobre la actividad minera, incluida la introducción de un importante impuesto sobre beneficios extraordinarios⁸⁵. Bolivia aumentó su presión fiscal más de 10 puntos porcentuales en solo tres años, del 18 % en 2003 al 29 % en 2006, en gran parte gracias a un nuevo impuesto sobre el sector de hidrocarburos⁸⁶. En Mozambique, la presión fiscal aumentó del 9 % al 23 % entre 2002 y 2014, gracias a las reformas administrativas y al énfasis puesto sobre los impuestos de sociedades⁸⁷. Georgia duplicó su presión fiscal entre 2003 y 2008, elevándola al 25 %⁸⁸ mediante la simplificación del código tributario, frenando la corrupción e invirtiendo en sistemas modernos de administración tributaria. Camboya también ha visto un fuerte y constante aumento de la presión fiscal en los últimos años gracias, entre otras cosas, a la inversión en evitar la evasión fiscal de los principales contribuyentes.⁸⁹

Para este informe, ActionAid también realizó una investigación propia sobre el potencial de ingresos de seis reformas fiscales progresivas en Malawi, Mozambique y Nigeria, lo que demuestra que hay suficiente espacio para un aumento significativo de los ingresos.⁹⁰ Las reformas propuestas, centradas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, los incentivos y los impuestos sobre bienes inmuebles y el consumo de lujo, podrían traducirse en un aumento en la presión fiscal del 1 % en Nigeria, del 2 % en Malawi y un sorprendente 6 % en Mozambique. Esta investigación concuerda con las estimaciones realizadas por otras organizaciones, incluida la propia estimación del FMI de que aplicar tipos más altos a las mayores rentas podría proporcionar ingresos adicionales del 1,9 % del PIB.⁹¹

Cabe destacar la transformación que puede provocar **actuar sobre las ventajas fiscales**. A pesar de los crecientes niveles de inversión extranjera directa en los países en vías de desarrollo, los impuestos a las empresas no han aumentado⁹². La escala de ventajas fiscales (como las vacaciones fiscales) ofrecidas a las empresas en los países en vías de desarrollo es realmente sorprendente. El Banco Mundial estima que solo con reducir las ventajas fiscales en los países en vías de desarrollo podría aumentar la recaudación tributaria entre un 2 % y un 4 % adicional en relación con el PIB, lo que podría traducirse en más de 190.000 millones de dólares en ingresos adicionales⁹³. La administración tributaria de Nepal estima que las ventajas fiscales ofrecidas a los inversores podrían representar el 5 % de su PIB⁹⁴, mientras que las estimaciones del Banco Mundial para Camboya sitúan las ventajas fiscales en el 5,7 % del PIB en 2015⁹⁵. Por suerte, la racionalización de las ventajas fiscales y la eliminación de las más perjudiciales —incluidas las vacaciones y las ventajas fiscales discrecionales— se han convertido en parte de las recomendaciones habituales del FMI.

Los impuestos a sobre bienes inmuebles, sobre patrimonio y unos tipos impositivos mayores en los impuestos sobre la renta (tanto de las personas físicas como de sociedades) también tienen un gran potencial en los países en vías de desarrollo y se consideran muy progresivos. Dado que el número de personas extremadamente ricas en los países en vías de desarrollo es cada vez mayor, gravar el patrimonio se convierte en un elemento básico de un sistema tributario progresivo⁹⁶. No obstante, los impuestos sobre bienes inmuebles en los países en vías de desarrollo suelen estar infrutilizados de forma significativa. También es importante gravar las rentas de los ricos. Dado que un gran porcentaje de los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas proviene del 10 % más rico de la población (30 %-50 % en las economías avanzadas), el cumplimiento fiscal de este grupo es absolutamente fundamental para garantizar la sostenibilidad de los ingresos de este impuesto.⁹⁷

Los países en vías de desarrollo también pierden una cantidad significativa de potenciales ingresos debido a problemas que requieren una **acción multilateral**. Abordar el problema de las ventajas fiscales, que se ve alimentado por la competencia entre países en materia tributaria, sería mucho más fácil si los países cooperaran en marcos regionales, acordando reducir de forma conjunta la cantidad de ventajas ofrecidas. Se estima que anualmente se pierden 500.000 millones de dólares a nivel mundial por evasión de impuestos corporativos, de los que 200.000 millones corresponden a países en vías de desarrollo⁹⁸. Sin una reforma significativa del enfoque internacional sobre los impuestos de sociedades, es casi imposible terminar con este problema de forma eficaz. La cooperación internacional también es crucial para poner fin al problema de los paraísos fiscales, donde los ricos pueden esconder su dinero, lejos del alcance de las autoridades fiscales. Se estima que cada año se podrían estar perdiendo hasta 190.000 millones de dólares en ingresos a nivel mundial debido a la evasión fiscal por parte de particulares en paraísos fiscales, de los cuales unos 70.000 millones provienen de países en vías de desarrollo⁹⁹. Esto hay que sumarlo a los billones en forma de capital improductivo que se encuentran en paraísos fiscales.¹⁰⁰

Una cooperación internacional más fuerte también abriría la puerta a poder aplicar de forma conjunta varios impuestos internacionales progresivos, área en la que los países han sido reacios a adoptar medidas unilaterales. Si bien muchos países han aplicado algunas formas de impuestos sobre el patrimonio, las operaciones financieras o la emisión de gases, un enfoque unificado y común podría fortalecer su aplicación, limitar las posibilidades de evasión y alentar a más países a unirse. No obstante, cualquier impuesto verdaderamente mundial requeriría, por supuesto, una institución

política mundial para su adopción y aplicación. En la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de 2015 en Adís Abeba, la creación de un organismo fiscal de la ONU recibió un importante respaldo político, pero lamentablemente no se aprobó como medida clave para financiar los ODS debido a la oposición de los gobiernos ricos¹⁰¹. No obstante, el tema permanece entre las reivindicaciones del G77 y de una gran cantidad de grupos políticos y no gubernamentales progresistas.

5.2 QUÉ SUPONDRÍA LA ACCIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS PARA EL GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

En la siguiente tabla¹⁰² hemos calculado los ingresos adicionales que podrían generarse con un aumento del 5 % en la presión fiscal para 2023 (en línea con las recomendaciones del FMI), y lo que esto supondría en términos de gasto en servicios públicos con perspectiva de género. Es importante tener en cuenta que este cálculo no analiza los mecanismos para lograr el aumento del 5 % (es decir, las reformas fiscales concretas), pero, como hemos demostrado anteriormente, se pueden lograr aumentos significativos a través de reformas fiscales progresivas. Para mostrar lo que se podría financiar con este nuevo aumento, hemos tomado los niveles de gasto actuales de los «sectores sociales» clave (incluidos educación, sanidad, WASH y protección social), que son aquellas áreas en las que ha quedado demostrado que el aumento de la inversión supone un gran cambio en las vidas (y en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado) de las mujeres.

5.3 AVANCES EN IMPUESTOS

Los gobiernos deben establecer ambiciosos objetivos para aumentar la presión fiscal de forma progresiva, buscando un incremento mínimo de un 1 % anual (5 % en cinco años y 10 % en diez años), con el objetivo de alcanzar una presión fiscal mínima del 30 % a largo plazo. Las principales prioridades deberían ser revisar los regímenes de ventajas fiscales y los impuestos de sociedades, estudiar la implantación de impuestos sobre el patrimonio y los bienes inmuebles, fortalecer los sistemas tributarios y fomentar la cooperación internacional en materia de impuestos de sociedades y reformas más amplias. Es crucial invertir en las autoridades tributarias para que pongan en marcha políticas fiscales y recauden impuestos de manera efectiva —especialmente de particulares ricos—, ya que generalmente no cuentan con los recursos suficientes.

Responder al covid-19 requerirá un aumento rápido y significativo de los ingresos públicos y podría exigir estudiar opciones de reforma fiscal aún más radicales, como por ejemplo:

- **Crear (o aumentar) un impuesto sobre el patrimonio dirigido a las personas más ricas, e incluso un «impuesto solidario» temporal o único** que grave el patrimonio neto (la presión pública en el contexto actual puede ayudar a garantizar que los ricos cumplen sus obligaciones fiscales más que en otros momentos).
- **Suspender todas las ventajas fiscales para empresas** de forma inmediata y elevar los tipos del impuesto de sociedades, con tipos más altos para aquellas empresas con rentas mayores y un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios.
- **Reducir el tipo del IVA y ampliar la lista de artículos exentos o con tipo cero** para que los alimentos y bienes básicos que necesitan las personas que viven en la pobreza sigan siendo asequibles.



País	Ingresos adicionales en 2023 con un aumento del 5 % (en comparación con 2017)	Podría doblar los presupuestos actuales de...	...y aún sobrarían
Afganistán	1.500 mill. \$	Educación, sanidad y protección social	371 mill. \$
Bangladés	32.000 mill. \$	Educación, sanidad y protección social	17.000 mill. \$
Benín	1.300 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	556 mill. \$
Burkina Faso	1.800 mill. \$	Educación y sanidad	410 mill. \$
Rep. Centroafricana	172 mill. \$	Educación, sanidad y WASH	70 mill. \$
Colombia	30.800 mill. \$	Educación, sanidad y protección social	3 mill. \$
Rep. del Congo	1.900 mill. \$	Educación, sanidad y protección social	1 mill. \$
Rep. Dem. del Congo	8.200 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	6 mill. \$
Ecuador	6.300 mill. \$	Educación	963 mill. \$
Etiopía	11.600 mill. \$	Educación, sanidad y WASH	5.890 mill. \$
Gambia	156 mill. \$	Educación y sanidad	19,9 mill. \$
Ghana	7.800 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	3.000 mill. \$
Guatemala	6.200 mill. \$	Educación, sanidad y WASH	2,7 mill. \$
Haití	1.800 mill. \$	Educación y sanidad	1,3 mill. \$
Jamaica	1.200 mill. \$	Sanidad, protección social y WASH	218 mill. \$
Jordania	3.200 mill. \$	Educación, sanidad y WASH	2,8 mill. \$
Kenia	10.000 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	3,8 mill. \$
Lesoto	283 mill. \$	Educación	62 mill. \$
Madagascar	1.200 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	547,4 mill. \$
Malawi	732 mill. \$	Educación, sanidad y protección social	97,6 mill. \$
Mali	1.800 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	620 mill. \$
Mozambique	1.300 mill. \$	Educación y sanidad	0 \$
Nepal	4.400 mill. \$	Educación, sanidad y protección social	2.300 mill. \$
Níger	979 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	121,6 mill. \$
Ruanda	1.300 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	697,5 mill. \$
Senegal	7.600 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	5.000 mill. \$
Sierra Leona	380 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	56,2 mill. \$
Sudáfrica	27.900 mill. \$	Educación	3.500 mill. \$
Tanzania	6.400 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	3,3 mill. \$
Togo	598 mill. \$	Educación, sanidad y WASH	201,5 mill. \$
Uganda	3.100 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	1.500 mill. \$
Zambia	6.200 mill. \$	Educación, sanidad, protección social y WASH	3.700 mill. \$
Zimbabue	2,4 mill. \$	Sanidad	3.000 \$

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La necesidad de aumentar de forma masiva la inversión en servicios públicos con perspectiva de género es acuciante. Es esencial que los países en vías de desarrollo cumplan los compromisos — asumidos hace mucho tiempo— sobre los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Es crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y transformador a la hora de abordar la injusticia de género que supone la desproporcionada cuota de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que corresponde a las mujeres. Cuando los servicios públicos no cuentan con fondos suficientes o se producen recortes, las mujeres sufren las consecuencias de forma desproporcionada, ya que son las primeras en perder el acceso a los servicios cuando se cobra por ellos, quienes tienen que caminar más para recoger agua o combustible, quienes asumen la carga de cuidar a los hijos/as, mayores y enfermos, y quienes pierden algunas de las mejores oportunidades de lograr un trabajo decente. Durante demasiado tiempo, muchos ministerios y activistas de las áreas de sanidad, educación, cuidado de menores, agua, energía, agricultura y transporte se han enfrentado entre sí, luchando por una mayor porción de un pastel pequeño, en lugar de unir fuerzas para exigir un pastel más grande del que todos se beneficiarían.

En muchos países, los servicios públicos no cuentan con fondos suficientes desde el inicio de los programas de ajuste estructural del FMI en la década de 1980. A pesar del discurso cada vez más progresivo en los documentos de investigación y las políticas del FMI, sus condiciones de préstamo y sus recomendaciones sobre políticas a nivel de país continúan con pocos cambios. Los objetivos de baja inflación y déficit obligan a los países a mantener bajo el gasto público, y la obsesión con la contención de los salarios públicos repercuten de forma directa en la capacidad de los países para invertir en servicios públicos. La nueva crisis de deuda amenaza con privarles aún más de recursos que se necesitan con urgencia para ampliar los servicios públicos. Las políticas fiscales aplicadas por la mayoría de los países carecen de la ambición necesaria y dependen demasiado de impuestos regresivos que perjudican a las mujeres.

Existen alternativas. Es hora de que los gobiernos de los países en vías de desarrollo se opongan a los excesos negativos de las recomendaciones del FMI y escuchen a sus propios ciudadanos. Los países pueden hallar un mayor desarrollo fiscal que el permitido por el fundamentalismo económico actual. En lugar de centrarse solo en medidas limitadas al crecimiento del PIB, se debe considerar que el progreso en el cumplimiento de los derechos y la corrección de la discriminación de género y otros sistemas de opresión son medidas clave para lograr el éxito económico. Un cambio radical en la financiación de los servicios públicos es posible si se actúa sobre la deuda, la austeridad y los impuestos. Si no se actúa, las mujeres quedarán desprotegidas, perpetuando la invisible injusticia del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Estimamos que las recomendaciones formuladas en este informe podrían reducir el número de horas que las mujeres de todo el mundo dedican a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en 9.000 millones de horas cada día en 2030¹⁰³. Dicho cambio radical es consecuencia de duplicar el gasto en educación, atención de la primera infancia, sanidad, agua, protección social y otros servicios, como la energía y el desarrollo agrícola. Esto reduciría como mínimo a la mitad el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los hijos/as y las personas enfermas, y a recoger agua y combustible, que constituyen una parte importante del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Nuestro informe contiene una serie de conclusiones de las cuales extraemos recomendaciones para el futuro:

CONCLUSIÓN 1: A partir de un análisis exhaustivo de 56 países (todos los PRB y una sección transversal de los PRM), vemos que, en la práctica, a nivel de país, la mayoría de **las recomendaciones y las condiciones del FMI no han cambiado**. Aunque en solo el 8 % de los países analizados el nivel de inflación supone un problema, se recomienda a casi el 80 % de los países congelar o reducir su tasa de inflación. Aunque la mayoría de los países analizados tienen déficits bajos, el FMI espera que el 70 % de ellos reduzca aún más su déficit y que otro 26 % lo mantenga en los niveles actuales, bloqueando su capacidad de aumentar el gasto en servicios públicos de calidad.

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deberían **seguir políticas macroeconómicas expansivas** e inversiones anticíclicas en servicios públicos con perspectiva de género, oponiéndose a la defensa que hace el FMI de la austeridad y de mayores restricciones de la financiación pública. Una tasa de inflación de hasta el 20 % no debería considerarse un problema de forma automática, y una tasa de

déficit inferior al 3 % se debería considerar baja y aceptable en aquellos países que necesitan realizar inversiones transformadoras en los servicios públicos para alcanzar los ODS u ofrecer una respuesta integral al covid-19.

CONCLUSIÓN 2: Después de dejar de defender los toques salariales en el sector público en 2007, el FMI coacciona ahora para contener el gasto en salarios públicos. El FMI anticipa una congelación o recorte de los salarios públicos en casi el 80 % de los países analizados. Aun cuando no son condiciones obligatorias o existen exenciones sectoriales, en la práctica se impide que los países contraten más profesorado, personal sanitario y otros profesionales del sector público. En épocas de recesión, profesionales de los servicios públicos (especialmente aquellos de los sectores de la atención, que suelen ser en su mayoría mujeres) son quienes primero sufren las consecuencias al perder sus empleos o ver cómo empeoran sus condiciones laborales y sus salarios.

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deberían invertir más en personal público no militar y oponerse a la «contención» en el gasto en los salarios públicos que defiende el FMI. Los gobiernos deberían reconocer que los/as empleados/as públicos (muchos de los cuales son mujeres) son una inversión esencial y sus condiciones necesitan ser protegidas y mejoradas tanto como la inversión de capital en momentos de recesión.

Para dar una respuesta al covid-19, es especialmente urgente aumentar en gran medida el número de personal sanitario y cuidadores/as, lo que está supeditado a la eliminación de las restricciones sobre los salarios públicos.

CONCLUSIÓN 3: Los países necesitan desesperadamente aumentar los ingresos tributarios para financiar su desarrollo, pero la mayoría de las recomendaciones del FMI se enfocan aún en aplicar impuestos regresivos en lugar de las diferentes alternativas progresivas. En el pasado, muchos países han aumentado sus bases impositivas de manera acelerada, y nuestras pruebas demuestran que esto puede hacerse de una manera progresiva y con perspectiva de género.

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deberían **establecer ambiciosos objetivos para aumentar presión fiscal de forma progresiva**, con el objetivo de aumentarla un 5 % en los próximos años y alcanzar un 10 % en 2030. Es necesario centrarse más en una recaudación fiscal progresiva y con perspectiva de género, incluida la eliminación de incentivos nocivos y la promoción y aplicación de impuestos de sociedades justos, así como impuestos sobre la renta, el patrimonio y los bienes inmuebles de los ricos. Como los líderes mundiales se encuentran «en pie de guerra» para hacer frente al covid-19, vale la pena recordar que, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los tipos impositivos para aquellas personas con mayores ingresos fueron por lo general superiores al 80 %, y a menudo superiores al 90 %.

CONCLUSIÓN 4: Existe una incipiente nueva crisis de deuda y el pago de esta probablemente aumentará de forma significativa en los próximos años en muchos países en vías de desarrollo. Gran parte de la deuda que se ha acumulado en los últimos años es con China o bancos privados, pero los préstamos rara vez se negociaron con total transparencia hacia el parlamento nacional o los ciudadanos. Esta deuda hace que los países vuelvan a depender del FMI, lo que a su vez conlleva una austeridad coactiva. Las elevadas facturas del pago de la deuda (más del 12 % de los presupuestos nacionales) están directamente vinculadas con la reducción del gasto en servicios públicos.

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deberían **suspender de inmediato los pagos de la deuda** para financiar las respuestas nacionales al covid-19 y **renegociar el pago de la deuda para el futuro** de forma que no supere el 12 % de los presupuestos nacionales. Deberían presionar para lograr mecanismos independientes de gestión de deuda y garantizar que todos los préstamos nuevos se negocien con total transparencia para el parlamento nacional, los medios de comunicación y los ciudadanos.

CONCLUSIÓN 5: La obsesión por medir el PIB hace que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres permanezca invisible. A pesar de las múltiples peticiones del movimiento de mujeres y de justicia medioambiental, el FMI y las élites económicas en su conjunto no han modificado su actuación en la práctica.

RECOMENDACIÓN: Todos los gobiernos deberían tener en cuenta el avance de los derechos humanos y los ODS —incluido el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado— en sus medidas y objetivos económicos nacionales. El enfoque futuro debería centrarse en **construir sociedades y economías que se preocupen tanto de las personas como del planeta**. Es hora de explorar ideas económicas alternativas y dejar de depender de la cosmovisión limitadora del FMI. El covid-19 es una oportunidad para un reinicio mundial, con una profunda reconsideración de las inversiones en los sectores públicos de sanidad, educación y cuidado de las personas más vulnerables de nuestras sociedades.

CONCLUSIÓN 6: La falta crónica de financiación adecuada de los servicios públicos durante dos generaciones ha conllevado deficiencias en la calidad de su prestación, fomentando la desilusión y abriendo la puerta a la privatización de los servicios, excluyendo de esta manera a las personas más desfavorecidas, alimentando la desigualdad y aumentando las cargas de cuidados asignadas a las mujeres. Actualmente, muchos donantes entregan sus aportaciones a entidades público-privadas o a servicios públicos privatizados.

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deberían centrarse en **la reconstrucción del consenso social nacional en torno a los servicios públicos, oponiéndose a la presión ideológica que fomenta la privatización** y las entidades público-privadas. Los gobiernos tienen que reclamar la soberanía democrática sobre las decisiones sociales y económicas críticas y poner a sus ciudadanos en primer lugar. Los gobiernos deberían negarse a aceptar préstamos o donaciones de cualquier fuente que contribuya a la privatización de los servicios públicos. Muy al contrario, deberían encaminarse a lograr una visión renovada de servicios públicos con perspectiva de género que solo rindan cuentas ante las personas. Las respuestas efectivas al covid-19 han dependido de fuertes medidas del gobierno y de la inversión pública, y algunos países han renacionalizado la sanidad, el transporte y otros servicios. Este debería ser un punto de inflexión mundial en el que las medidas colectivas y los servicios públicos se valoren por encima del interés propio y el beneficio privado.

CONCLUSIÓN 7: Es posible realizar un cambio radical en la financiación de servicios públicos con perspectiva de género, adoptando medidas sobre impuestos, deuda y austeridad. En la mayoría de los países es posible como mínimo duplicar el gasto actual en servicios públicos. Esto tendría un efecto transformador en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres, lo que conllevaría una redistribución estructural en lugar de solo simbólica.

RECOMENDACIÓN: Los países deberían realizar inversiones estratégicas y duraderas en servicios públicos con perspectiva de género. Tienen que oponerse a las condiciones y a la ideología hegemónica de austeridad del FMI. Los ciudadanos deben unirse para exigir esto, uniéndose los activistas de los derechos de las mujeres, los activistas de defensa de la educación, la sanidad y el agua, los sindicatos de servicios públicos, los movimientos de justicia fiscal, etc. Es hora de defender al sector público en su conjunto y no permitir enfrentar a unos servicios contra otros. Es hora de construir economías y sociedades que se preocupen por las personas y el planeta. ¡Es hora de demostrar a quién le importan!

NOTAS FINALES

- 1 <http://theconversation.com/womens-unpaid-work-must-be-included-in-gdp-calculations-lessons-from-history-98110>
- 2 Bayas, B. Care Debt – Patriarchy and Capital on the Offensive – Feminist Economics as a Solution. 2017.
- 3 ILO. Care Work and Care Jobs, 2019. <https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang--en/index.htm>
- 4 <https://news.un.org/en/story/2013/10/453702-womens-unpaid-work-home-major-human-rights-issue-says-un-expert>
- 5 https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_633284/lang--en/index.htm
- 6 Ibid, page 19 and page 31.
- 7 ILO. A quantum leap for gender equality,. 2019. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf ActionAid, Not Ready, Still Waiting. 2016:
- 8 https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_633284/lang--en/index.htm
- 9 See Diane Elson for a short summary of the 3 R framework, 2017: <https://newlaborforum.cuny.edu/2017/03/03/recognize-reduce-redistribute-unpaid-care-work-how-to-close-the-gender-gap/>
- 10 <https://legal.un.org/avl/ha/icescr/icescr.html>
- 11 The ILO definition of decent work is an important reference point <https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm>
- 12 <https://www.girlsnotbrides.org/themes/education/>
- 13 <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/10/school-closures-coronavirus-care>
- 14 WIEGO / ILO: <https://www.wiego.org/blog/three-new-ways-looking-urgent-need-quality-childcare>
- 15 UNESCO. Global Education Monitoring (GEM) report. 2016. Page 428. <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-people-and-planet-creating-sustainable-futures-all>
- 16 <https://www.sdg4education2030.org/new-education-data-sdg4-focus-out-school-children-27-september-2018>
- 17 Ibid.
- 18 <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.PRIV.ZS>
- 19 <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1042214.pdf>
- 20 UNSECO. Incheon Framework for Action. 2015.
- 21 Center for Universal Education at Brookings. The Standardized Early Childhood Development Costing Tool (SECT). 2017.
- 22 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Educação 2018. 2018.
- 23 This data refers to the district of Sacomã, where the favela of Heliópolis is located.
- 24 [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)60497-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60497-4/fulltext)
- 25 Brunwijck, op cit. Page 19.
- 26 <https://www.who.int/sdg/targets/en/>
- 27 <https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2818%2930316-4/fulltext>
- 28 <https://data.worldbank.org/indicator/SH.DTH.COMM.ZS>
- 29 <https://www.who.int/gho/child-malnutrition/en/>
- 30 <https://www.infoplease.com/world/health-and-social-statistics/physicians-100000-people-country>
- 31 <https://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/health>
- 32 Add link to AA Nigeria report – not yet uploaded on website
- 33 Ibid.
- 34 WHO. Spending targets for health: no magic number. 2016. Pages 4 and 5. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250048/WHO-HIS-HGF-HFWorkingPaper-16.1-eng.pdf;jsessionid=3E36E96B13A0EF9A93527B72FC87FCA6?sequence=1>
- 35 WHO. Public Spending on Health: A Closer Look At Global Trends. 2018. Table 2.1, page 17.
- 36 <https://views-voices.oxfam.org.uk/2018/03/access-water-care-work/>
- 37 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/>
- 38 Ibid.
- 39 <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html>
- 40 <http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol12/v12issue3/528-a12-2-11/file>
- 41 UN Water and WHO. Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water. 2017.
- 42 Ibid, page 16.
- 43 WaterAid. What at What Cost? The State of the World's Water. 2016. <https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/Water%20%20At%20What%20Cost%20%20The%20State%20of%20the%20Worlds%20Water%202016.pdf>
- 44 <https://www.unwater.org/water-facts/financing/>
- 45 "According to the Privatization Barometer (PB) Report 2013-2014, the global privatisation total exceeded US\$1.1 trillion from January 2009 to November 2014, including US\$544 billion divested assets between January 2012 and November 2014. This is far more than any comparable period since the beginning of the privatisation programs in the U.K. in the late 1970s." https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08977ed915d3cfd000264/Topic_Guide_Privatisation_Nov.pdf
- 46 <https://www.world-psi.org/en/advancing-womens-human-rights-through-gender-responsive-public-services>
- 47 <https://actionaid.org/publications/2018/framework-2018-gender-responsive-public-services>
- 48 UNCTAD. Debt Warning Lights Flash for Poorest Countries, Experts Say. 3 May 2018. http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1742&utm_source=CIO+--+General+public&utm_campaign=9183a3c561-UNCTAD+CSO+Newsletter+16+November&utm_medium=email&utm_term=0_3d334fa428-9183a3c561-70457153

- 49 Jubilee Debt Campaign. Note that we follow JDC's practice of determining debt payments by combining figures for external debt servicing and the servicing of domestic interest, which, unlike domestic debt principals cannot be easily re-financed.
- 50 JDC. Developing country debt payments increase by 60% in three years. March 2018. and JDC. Crisis deepens as global south debt payments increase by 85%, April 2019. <https://jubileedebt.org.uk/press-release/crisis-deepens-as-global-south-debt-payments-increase-by-85>
- 51 Jubilee Germany/Erlassjahr. Global Sovereign Debt Monitor. 2019. Page 4.
<https://erlassjahr.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/Global-Sovereign-Debt-Monitor-2019.pdf>.
- 52 Calculations by Jubilee Debt Campaign based on <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/PP/2017/pp082217lic-dsf.ashx> Page 43.
- 53 Ibid
- 54 The average wages of nurses was taken from here: <http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=18&loctype=1&job=11189&jobtype=3> and then converted to USD in current prices (US\$7,519). For doctors we took the bottom 25% of earners to account for the very high salaries of doctors in non-primary healthcare settings in Bangladesh (i.e. doctors serving poor rural primary health centres, this was US\$12,644). See: <http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=18&loctype=1&job=13&jobtype=2> We then simply divided this with the 15% share of the US 5.5 billion (i.e. US\$825,000,000)
- 55 There are around 38,054 primary teachers and 58,291 secondary school teachers.
- 56 We took the salary scale and looked at what a primary and secondary teacher on a Grade C upper scale would get in this estimate (Sh74,280 monthly); by taking the more upper end of this salary scale this is probably an underestimate.
- 57 Sitefane, G et al, Climate disaster fund needed to stop countries being pushed further into poverty, Thompson Reuters, 2019. 58 Eurodad. Responsible Finance Charter. 2011. https://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/reports/charter_final_23-11.pdf
- 59 Bohoslavsky, J.P. Responsibility for complicity of international financial institutions in human rights violations in the context of retrogressive economic reforms. 2019 <https://undocs.org/A/74/178> §19
- 60 The U.S. currently holds 16.52% of the votes; major policy decisions require an 85% super-majority to be adopted; see <https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#1>.
- 61 See list in appendix XX
- 62 Brunwijck, G. Unhealthy Conditions: IMF Loan Conditionality and its Impact on Health Spending. Eurodad, 2018. Page 3.
<https://eurodad.org/entries/search?words=unhealthy+conditions>
- 63 Chowdhury, A. "Fiscal Policy for Inclusive Sustainable Development: The Role of Public Expenditure and Progressive Taxation," in Chowdhury & Vladimir Popov, eds., Macroeconomic Policies in Countries of the Global South, Nova Science Publishers, New York, 2019. Page 47.
- 64 Ibid
- 65 Roy and Ramos. Page 16.
- 66 See, for example: <https://actionaid.org/publications/2007/confronting-contradictions>
- 67 IMF. Public Information Notice #07/83: IMF Executive Board Discusses Operational Implications of Aid Inflows for IMF Advice and Program Design in Low-Income Countries. 2007. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn0783>.
- 68 Ibid.
- 69 Bradlow, D. An IMF that works for Africa. 2019.
- 70 Brunwijck, G. Unhealthy Conditions: IMF Loan Conditionality and its Impact on Health Spending. Eurodad, 2018.
<https://eurodad.org/entries/search?words=unhealthy+conditions>
- 71 OECD. Development aid drops in 2018, especially to neediest countries, 10 April 2019
<https://www.oecd.org/newsroom/development-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.htm>
- 72 UNDP. What Will It Take to Achieve the Millennium Development Goals? An International Assessment. 2010.
- 73 ICTD/UNU-WIDER Government Revenue Dataset
- 74 ICTD/UNU-WIDER Government Revenue Dataset
- 75 E.g. UNDP Human Development Index or OECD Better Life Index
- 76 Gaspar, P. et al. Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for the SDGs. IMF Staff Discussion Note, January 2019.
- 77 IMF. Taxing Times, October 2013. Fiscal Monitor, 2013.
- 78 Prichard, W. What Might an Agenda for Equitable Taxation Look Like? Summary Brief No. 16. International Centre for Tax and Development, Brighton, 2018.
- 79 Buenaventura, M. and Miranda, C. The IMF, Gender Equality and VAT. Bretton Woods Project, 2017
- 80 Reinsberg, B. et al. Do IMF Programs Help Raise Tax Revenue? Unpublished paper. Pages 2 and 3. https://www.peio.me/wp-content/uploads/2018/01/PEIO11_paper_38.pdf
- 81 Oxfam. Is IMF tax practice progressive. Oxfam Discussion Papers, September 2017
- 82 ActionAid. Making tax work for women's rights. London, 2016.
- 83 All tax revenue figures in this section come from the ICTD/UNU-WIDER Government Revenue Dataset, 2017.
- 84 USAID. Domestic Resource Mobilization. Case Study of Nepal, 1997-2016. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Nepal_DRM_case_study_briefing_note_FINAL.pdf
- 85 UNRISD. Policy Innovations for Transformative Change. 2016
- 86 IMF. Bolivia: Selected Issues. IMF Country Report No. 07/249. July 2007
- 87 World Bank. Mozambique Public Expenditure Review. September 2014
- 88 ICTD/UNU-WIDER Government Revenue Dataset, 2017.
- 89 Akitoby, B. Raising Revenue. Finance & Development, Vol. 55, No. 1, IMF, March 2018.
- 90 See the full version of the report for more details.
- 91 IMF. Taxing Times, October 2013. Fiscal Monitor, 2013.
- 92 ActionAid. Levelling up. July 2015.

- 93 Shukla, P et al. Strengthening Domestic Resource Mobilization: Moving from Theory to Practice in Low- and Middle-Income Countries. 2017.
- 94 USAID. Domestic Resource Mobilization. Case Study of Nepal, 1997-2016.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Nepal_DRM_case_study_briefing_note_FINAL.pdf
- 95 Mills, L. Barriers to increasing tax revenue in developing countries. K4D Helpdesk Report. 2017.
- 96 Knight Frank. The Wealth Report. 2017
- 97 IMF. Current Challenges in Revenue Mobilization: Improving Tax Compliance. 2015.
- 98 Tax Justice Network. Tax avoidance and evasion - The scale of the problem. 2017. <https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2017/11/Tax-dodging-the-scale-of-the-problem-TJN-Briefing.pdf>
- 99 Third World Network. Why tax havens must go! CADTM, 23 August 2016 <http://www.cadtm.org/Why-tax-havens-must-go>
- 100 Zucman, G. The Hidden Wealth of Nations University of Chicago Press, 2015. <http://digamo.free.fr/zucman152.pdf>
- 101 UN. Addis Ababa Action Agenda. 2015 https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
- 102 Si se desea más detalles sobre **las fuentes de los datos y límites de esta tabla, consúltese el informe completo.**
- 103 Basado en datos de 64 países que representan dos tercios de la población mundial en edad de trabajar y que muestran que se dedican 16.400 millones de horas al día al trabajo de cuidados no remunerado (véase la nota 2). Si añadimos un tercio más, obtenemos una cifra global de aproximadamente 24.000 millones de horas diarias dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Los principales componentes de la carga de trabajo a los que hace referencia el informe de Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU, son: trabajo doméstico (preparación de comida, limpieza, lavado de ropa, recogida de agua y combustible) y atención directa de otras personas (incluidos hijos/as, mayores y personas con discapacidad, como así como adultos sanos). La tabla 11 muestra que, al adoptar medidas para aumentar los impuestos de forma progresiva, en un plazo de entre tres y cinco años muchos países podrían duplicar su gasto en sanidad, educación (incluida la atención y educación de la primera infancia), agua y, a veces, también protección social u otros servicios (por ejemplo, la energía, muy importante a la hora de reducir el tiempo dedicado a recoger combustible). Otras medidas destinadas a suspender o reprogramar la deuda (ver tabla 4) también podrían aumentar drásticamente el gasto en servicios públicos. Igualmente, las medidas para poner fin a la austeridad y a la contención de los salarios públicos podrían poner a disposición más recursos. Para 2030, la combinación de estas medidas podría transformar la base de financiación de todos los servicios públicos en todos los países en vías de desarrollo (a veces incluso cuadruplicando los recursos disponibles). Como consecuencias, se reduciría a la mitad el tiempo dedicado al cuidado de hijos, mayores y enfermos en el hogar, y las mejoras de las infraestructuras de agua y energía reducirían en más de la mitad el tiempo dedicado a la recogida de agua y combustible. Según una estimación conservadora, esto supondría ahorrar 12.000 millones de horas al día (tanto para mujeres como para hombres). Como las mujeres realizan aproximadamente tres cuartas partes del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ahorrarían 9.000 millones de horas al día.

Síguenos en



Alianza por la
Solidaridad

Member of

act:onaid

C/ Jaén, 13 Local / 28020 Madrid / T 91 598 62 90 / aps@aporsolidaridad.org

www.alianzaporlasolidaridad.org